

Santiago, veintidós de mayo de dos mil veinticinco.

A los escritos folios N°7 y 9: a todo, téngase presente.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia apelada con excepción de su fundamento tercero, que se elimina.

Y se tiene en su lugar, además, presente:

1º) Que, por medio del ejercicio de la acción constitucional de amparo no solo se intenta restablecer cualquier privación o restricción ilegal a la libertad personal o seguridad individual de una determinada persona, sino que también cualquier amenaza de afectación a la misma.

A su vez, la conculcación de la aludida garantía fundamental puede originarse por vía principal o bien de forma consecuencial. Así, responde a la primera variable aquellos casos en que los efectos del acto cuestionado lesionan directamente la libertad personal o seguridad individual, mientras que por la segunda variante la citada garantía fundamental se ve indirectamente afectada o amenazada con ocasión de la ejecución de un acto lesivo de uno o más derechos distintos.

Pues bien, en uno u otro caso, la acción de amparo emerge como un mecanismo idóneo para representar y dejar sin efecto aquellos eventos que principal o consecuencialmente pongan ilegítimamente en riesgo el ejercicio de la libertad personal o seguridad individual. Pensar de contrario, esto es, reducir el ámbito de aplicación de la referida acción exclusivamente a hipótesis asociadas a infracciones causadas por vía principal, lisa y llanamente importaría una injustificada restricción al derecho de accionar en procura de acceder a una tutela judicial efectiva.

2º) Que, en el caso *sub lite*, los amparados denunciaron que con motivo



de una diligencia de entrada y registro que califica de ilegal, se vio truncada la libertad personal. Es decir, los recurrentes reclaman infringida la referida garantía como consecuencia de una actuación que, si bien natural y directamente se relaciona con el derecho a la inviolabilidad del hogar, por vía indirecta tuvo incidencia negativa en la libertad personal.

Bajo esa inteligencia, resulta palmaria la procedencia de la acción de amparo entablada en el caso en examen, en atención a que la ejecución de una orden de entrada, registro e incautación encarna claramente la coactividad que detenta el aparato estatal para el cumplimiento de su función indagatoria y las consecuencias que puede arrastrar su empleo que pueden comprometer la libertad personal.

En ese entendido, si la resolución judicial que decretó la diligencia de allanamiento es cuestionada de ilegalidad por sus destinatarios, procede constatar la concurrencia de los presupuestos jurídicos que habilitan para accionar de amparo y reclamar de la judicatura la adopción de las medidas tendientes a restablecer la eficacia del derecho que se dice conculcado.

3º) Que zanjado lo anterior, corresponde enseguida indicar que el artículo 5 inciso primero del Código Procesal Penal dispone que *“No se podrá citar, arrestar, detener, someter a prisión preventiva ni aplicar cualquier otra forma de privación o restricción de libertad a ninguna persona, sino en los casos y en la forma señalados por la Constitución y las leyes”*. Cabe decir que esta directriz se inserta dentro del Título Primero del Libro Primero del Código Procesal Penal, denominado *“Principios básicos”*, esto es, auténticas directrices axiológicas que inspiran y se proyectan en todo el articulado que integra el citado texto legal, erigiéndose, por lo tanto, en imperativos ineludibles de aplicar.

En ese sentido, el precepto transcrito pone de relieve el llamado *“principio*



de legalidad” en relación con las medidas privativas o restrictivas de libertad, prescribiendo como límite de validez a la jurisdiccionalidad en su imposición la sujeción a los casos y formas establecidos en la ley. En otros términos, una resolución judicial respetará el principio enunciado si se observan, entre otros aspectos, las formas dispuestas en la ley en su pronunciamiento, ya que, en caso contrario, lisa y llanamente se estará en presencia de un dictamen ilegal.

4º) Que, en esa ilación, una de las principales formas asociadas al pronunciamiento de resoluciones judiciales y que fue recogida expresamente por el Código Procesal Penal, se localiza en su artículo 36. Por medio de la referida disposición se consagra que *“será obligación del tribunal fundamentar las resoluciones que dictare, con excepción de aquellas que se pronunciaren sobre cuestiones de mero trámite. La fundamentación expresará sucintamente, pero con precisión, los motivos de hecho y de derecho en que se basaren las decisiones tomadas”*. Como se observa, del mérito de la norma transcrita queda de manifiesto el denominado *“mandato de fundamentación”* inherente a la mayoría de los pronunciamientos judiciales e integrante de las garantías mínimas que conforman la arquitectura de la garantía del debido proceso. Tal lineamiento se satisface explicitando con precisión, las razones fácticas y jurídicas en el que se apoya el dictamen, con el propósito de que los intervinientes se impongan adecuadamente del proceso reflexivo que condujo al juzgador a resolver en un determinado sentido.

5º) Que, en el caso concreto, los amparados acusan la inobservancia del deber de fundamentación en la resolución que decretó la medida de entrada, registro e incautación de documentos y medios o aparatos tecnológicos de su propiedad, ignorando los motivos que llevaron a otorgarla.

Para estos efectos, la argumentación se centra en que se desconocen los



antecedentes que fundaron la decisión del tribunal, pues la investigación permanece reservada y también afirman que los amparados no mantienen la calidad de imputados en la investigación seguida por el Ministerio Público y que la resolución impugnada no hace alusión ni a los amparados y menos aún señala que calidades tienen.

Esto, debido a que la decisión judicial no menciona a los amparados y menos aún hace referencia a la calidad que ostentan, lo que se ratifica con lo señalado por el Fiscal a cargo de la causa, quien afirmó que la permanencia en el lugar de los amparados y la incautación de sus teléfonos celulares obedecían a la necesidad de contar con su presencia en la diligencia, sin precisar si se trataban de testigos o imputados.

Es este estadio de incerteza procesal el que provoca una seguidilla de repercusiones en distintas garantías y que se extienden desde una evidente vulneración al derecho de defensa y en una amenaza a la libertad personal de los amparados, los que además fueron retenidos en el lugar por varias horas.

6°) Que, luego, es preciso determinar si la resolución judicial que autorizó la entrada, registro e incautación en el inmueble donde se encontraban los amparados trabajando, cumplió o no con las formas establecidas en la ley, al tenor de lo preceptuado en el artículo 5 inciso primero del Código Procesal Penal, en específico con el mandato de fundamentación descrito en el artículo 36 del citado cuerpo legal.

En ese sentido, de la lectura de las resoluciones dictadas por el juez de garantía para efectos de otorgar la medida intrusiva, se aprecia que ellas hacen alusión a los antecedentes expuestos por el Ministerio Público en su solicitud, sin expresar cuales son y el tenor de ellos, ni tampoco hace referencia a los amparados.



7º) Que, sin perjuicio de lo expresado en el motivo que antecede el juez de garantía al informar el recurso de amparo expresó que libró la orden judicial impugnada atendido que la fiscalía mantenía una investigación abierta por los delitos de asociación ilícita, tráfico de residuos peligrosos, malversación de caudales públicos y delito de lavado de activos en contra de las empresas Confinor S.A. y Soluciones Ecologicas Del Norte S.A en relación a denuncias cruzadas y querellas según las cuales ambas empresas gestionarían actividades medio ambientales, las que debieron contar con autorización por parte de la autoridad sanitaria respectiva.

Hace presente una serie de antecedentes que hacen referencias a las actividades desplegadas por sociedades, entre ellas la empresa en que trabajan los amparados, respecto a disposición de residuos y a las irregularidades en que habrían incurrido, circunstancias que podrían ser constitutivos de los ilícitos investigados.

En relación con la incautación de teléfonos celulares y demás equipos tecnológicos, solicitada en la misma presentación, ésta se concedió al ser fundamentada con los mismos antecedentes ya reseñados, con el agregado de que además el Ministerio Público se encontraba investigando aristas relacionadas con la eventual comisión de los delitos de fraude al fisco, cohecho y lavado de activos, por lo que, a juicio del juez informante, se justificaba la diligencia al ser útil para la indagación de información relativa a las empresas Soluciones Ecológicas Del Norte S.A y Confinor S.A, en relación a dichos ilícitos.

8º) Que de lo expuesto, es posible colegir que las medidas intrusivas autorizadas y que afectaron la libertad personal de los amparados, fueron consecuencia de una resolución dictada con prescindencia del deber de fundamentación, transformando en ilegal el dictamen judicial y, con ello, habilita a



esta Corte Suprema para emitir pronunciamiento favorable en relación con la apelación interpuesta en beneficio de los amparados, por cuanto las resoluciones pronunciadas por el juez de garantía carecen de sustento fáctico y jurídico, pues solo se expresaron los antecedentes que justificaban las decisiones al momento de informar, no así en las resoluciones que autorizaban las diligencias.

9º) Que, tampoco se explica por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones de Chile, la retención de los amparados en el inmueble mientras se llevaba a cabo de diligencia, salvo una alusión genérica a que era necesario para poder realizarla, sin que señalen una norma que habilite a efectuar esa privación transitoria de libertad, más si se considera que no se precisa que calidad tienen los recurrentes en la investigación, por lo que deberá investigarse tal circunstancia.

Por estas consideraciones y lo dispuesto, además, en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, **se revoca** la sentencia apelada de nueve de mayo de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de Copiapó, en el Ingreso Corte N° 100-2025, y en su lugar se declara que **se acoge** la acción de amparo deducida a favor de Óscar Andrés González Rivera, Óscar Marcelo López Vivar y Rodrigo Alejandro Ramírez Tirado y, en consecuencia, se deja sin efecto las medidas intrusivas efectuadas respecto de los amparados, especialmente la incautación de sus teléfonos celulares, debiendo el Ministerio Público hacer entrega inmediata a los recurrentes de esos objetos que le fueron incautados, disponiendo que el Juzgado de Garantía de Copiapó fiscalice y arbitre las medidas que resulten atinentes para obtener el pronto cumplimiento de lo ordenado.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Rol N° 16420-2025.





JNSXUSXTXR

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., Maria Gajardo H. y Abogado Integrante Raul Fuentes M. Santiago, veintidós de mayo de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintidós de mayo de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

